



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, tres (03) de octubre dos mil veintitrés (2023)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	ORFANNY HERNANDEZ ORTEGA
DEMANDADO:	AFP PORVENIR S.A. – AFP PROTECCION S.A.- COLFONDOS S.A. – COLPENSIONES
RADICADO:	050013105 011 2018 00441 01
ACTA N°:	090

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE y JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**, se constituyó en audiencia pública en el proceso del trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **ORFANNY HERNANDEZ ORTEGA** para pronunciarse en virtud del recurso de apelación de las **DEMANDADAS** y en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES**, frente a la sentencia con la cual el Juzgado **Once** Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 090** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA¹

La DEMANDANTE pretende con este proceso básicamente lo siguiente: **i)** Que se declare el traslado de la Actora del RPM a PROTECCIÓN S.A. viciado de nulidad o ineficacia por vicios del consentimiento (engaño y error) y por haber violado la AFP PROTECCIÓN S.A. el deber objetivo de información en detrimento de los intereses de la Actora. Así como también, se declare la nulidad o ineficacia del traslado de PROTECCIÓN S.A. a HORIZONTE y luego a COLFONDOS S.A.; en consecuencia, que se declare que la Actora está válidamente afiliada a COLPENSIONES. **ii)** Que se condene a COLFONDOS S.A. a trasladar los aportes de la cuenta de ahorro individual, con sus rendimientos. Así como condenar a COLPENSIONES a recibir estos aportes. **iii)** Que se condene en costas y agencias de derecho a las demandadas y a lo que se demuestre en el proceso ultra y extra petita.

En sustento de sus pedimentos afirmó básicamente lo siguiente: **i)** La actora nació el 07 de diciembre de 1962, se afilió al ISS en septiembre de 1984. En su lugar de trabajo, en el año 2000, se acercó un asesor de PROTECCIÓN S.A., quien insistentemente

¹ 01PrimeralInstancia / Archivo 001 / Pág. 2 – 12

manifestaba que se trasladaran a este fondo de pensiones mucho mejor que el ISS. La Actora el 01 de mayo de 2000 realizó el traslado hacia PROTECCIÓN cuando contaba con 469 semanas cotizadas en el ISS. Faltando el asesor de PROTECCIÓN S.A. en brindar una asesoría completa con ventajas y desventajas económicas que acarrearía el traslado. **ii)** En caso de que la demandante perteneciera al RPMPD gozaría para el 2018 de un IBL de \$4.014.194, aproximadamente con una tasa de reemplazo del 65,93%, lo que arroja una mesada de \$2.648.558. **iv)** EL 27 de abril de 2018, se radico ante COLPENSIONES solicitud de ineficacia del traslado, petición que fue negada mediante comunicado del 08 de mayo hogaño.

2. CONTESTACIONES

2.1. COLPENSIONES²

La administradora del RPM se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso como excepciones: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE TRASLADO ENTRE REGIMENES PENSIONALES, IMPOSIBILIDAD DE APLICAR PRECEDENTE JUDICIAL Y LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, LA GENÉRICA.

2.2. AFP COLFONDOS S.A.³

En la contestación, la sociedad administradora del RAIS se opuso a todas las pretensiones. Propuso como excepciones: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL TRASLADO, HECHO DE UN TERCERO, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, COMPENSACIÓN Y PAGO, GENÉRICA O INNOMINADA.

2.3. AFP PROTECCIÓN S.A.⁴

La entidad se opuso a las pretensiones, declaraciones y condenas. Propuso como excepciones: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, TRASLADO DE APORTES A PORVENIR S.A., APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, PRESCRIPCIÓN, INNOMINADA O GENÉRICA.

2.4. AFP PORVENIR S.A.⁵

LA **AFP PORVENIR** fue integrada con providencia del 10 de marzo de 2022⁶, esta se opuso a todas y cada una de las peticiones formuladas en la demanda que pretendan hacer recaer sobre ella cualquier tipo de consecuencia jurídica o económica, y solicitó se le absuelva de todas y cada una de ellas. Propuso como excepciones: PRESCRIPCIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD, COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, BUENA FE.

² 01PrimerInstancia / Archivo 001 / Pág. 55 – 61

³ 01PrimerInstancia / Archivo 001 / Pág. 100 – 110

⁴ 01PrimerInstancia / Archivo 001 / Pág. 138 – 161

⁵ 01PrimerInstancia / Archivo 009 / Pág. 2 – 28

⁶ 01PrimerInstancia / Archivo 008

3. SENTENCIA⁷

En la audiencia del **05 de mayo de 2023** el **JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN** tomó las siguientes decisiones:⁸ **i) DECLARÓ** la ineficacia de la vinculación al RAIS de ORFANNY HERNANDEZ ORTEGA, administrado por COLFONDOS SA, AFP PORVENIR SA Y AFP PROTECCION SA. **ii) ORDENÓ** a COLFONDOS SA trasladar a COLPENSIONES EICE los aportes de la demandante como son cotizaciones, gastos de administración, con todos sus frutos e intereses, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, el porcentaje correspondiente a la garantía de pensión mínima, y, también deberá trasladar la prima de reaseguro de FOGAFIN que se hubieren generado y los aportes al fondo de solidaridad pensional que se hubieren causando en el tiempo en que la actora estuvo vinculada a dicha administradora, en razón a la declaración de la ineficacia del traslado. **iii) ORDENÓ** a la AFP PROTECCION SA y AFP PORVENIR SA, trasladar los aportes de la demandante consistentes en los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, el porcentaje correspondiente a la garantía de pensión mínima, la prima de reaseguro de FOGAFIN que se haya generado y los aportes al fondo de solidaridad pensional que se hubieren causado en el tiempo en que la actora estuvo vinculada a dicha administradora. **iv) ORDENÓ** a COLFONDOS SA AFP, AFP PORVENIR SA Y AFP PROTECCION SA a **indexar** los dineros a devolver por **gastos de administración**, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, consistentes en, costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al fondo de garantía de la pensión mínima, lo cancelado por la prima de reaseguro de FOGAFIN que se hubieren generado y los aportes al fondo de solidaridad pensional que se hubieren causado durante el tiempo que la demandante estuvo vinculada a dicho fondo de pensiones y sin aplicar equivalencia alguna. E igualmente se dispone que, al momento de cumplir la orden, los conceptos aparezcan discriminados por la AFP con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información importante que los justifique. **v)** Todos estos valores deben de ser consignados por COLFONDOS SA AFP, AFP PORVENIR SA Y AFP PROTECCION SA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, quien deberá recibirlos y reactivar la vinculación de ORFANNY HERNANDEZ ORTEGA al RPMPD sin solución de continuidad. **vi) Las COSTAS** están a cargo de las entidades demandadas, PROTECCION SA, PORVENIR SA, COLFONDOS SA y COLPENSIONES EICE.

4. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. AFP COLFONDOS S.A.⁹

En el recurso se cuestiona en primer lugar **la condena en costas**, señalando que no tuvo un actuar de mala fe al momento de la asesoría y en el manejo de los aportes de la demandante, no se le ocultó nunca información y siempre estuvo presta a cualquier tipo de asesorías, por lo que no se logra evidenciar un actuar de mala fe frente a la

⁷ 01PrimerInstancia / Archivo 17

⁸ 01PrimerInstancia / Archivo 18 / Min.:

⁹ 01PrimerInstancia / Archivo 18 / Min.: 2:03:53

demandante. Y respecto **al traslado** argumenta que la demandante tuvo gran cantidad de traslados horizontales dentro del RAIS lo que da garantía de que tuvo pleno conocimiento del régimen donde se encontraba afiliada por más de diez años y, tuvo la posibilidad de asesorarse sobre lo favorable y desfavorable.

4.2. AFP PROTECCIÓN S.A.¹⁰

Cuestiona la entidad la orden de **devolución de FOGAFIN y el Fondo de Solidaridad Pensional**, considerando que ello no es procedente señalando que este es una entidad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de proteger los ahorros de los subsidios depositados en bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades especializadas en depósitos electrónicos, que fue creado en 1985 para enfrentar la crisis financiera de aquella época y a finales de los años 90 se ejecutó el programa de salvamento del gobierno nacional, focalizado a atender las dificultades que fortalecían los establecimientos de crédito y ahorradores del sistema. Invoca así el artículo 99 de la Ley 100 de 1993, la Resolución 05 del 2009 que derogó la regulación anterior contenida en la Resolución 01 del 2009, para señalar que se está ordenando a PROTECCIÓN el traslado a Colpensiones de un concepto completamente derogado por la normatividad que lo regula, y que por la disposición normativa fue girado al tesoro nacional: estos recursos ya no se encuentran en PROTECCIÓN y COLPENSIONES tampoco sería el destinatario legítimo.

En el mismo sentido cuestiona la orden de **devolución de reaseguro** es un contrato de seguro mediante el cual una compañía aseguradora cedente pasa a ser asegurado de otra entidad, reaseguradora; contrato que no se configuró durante la vigencia de la afiliación de la parte demandante a, por lo que no hay efecto alguno a retrotraer para el caso en concreto. Finalmente, señala que no existen en los cobros realizados por PROTECCIÓN como gastos de administración a títulos de reaseguro durante la vigencia de la afiliación de la parte demandante, ya que, es una figura distinta a la establecida en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993,

4.3. AFP PORVENIR S. A.¹¹.

La apoderada plantea su inconformidad en los siguientes términos: **i)** El traslado horizontal efectuado en el año 2008 a Horizonte fue completamente válido por lo que nos dan los presupuestos para declararlo ineficaz, la demandante se afilió de manera libre y voluntaria y destaca que para el tiempo en que se efectuó no existía la obligación de informar por escrito y sobre el monto de pensión, lo que se exige en normas posteriores como en el Decreto 2550 de 2010. **ii)** Cuestiona la condena a devolver los gastos de administración del artículo 20 de la ley 100 de 1993, a la afiliada se le aseguró el riesgo en invalidez y muerte, y la Súper Financiera ha dicho que en estos procesos se deben respetar las restituciones mutuas (artículo 1764 del Código Civil), por lo que no se

¹⁰ 01PrimeraInstancia / Archivo 18 / Min.: 2:05:30

¹¹ 01PrimeraInstancia / Archivo 18 / Min.: 2:15:22

debe ordenar el traslado de las primas, ni las comisiones de cuotas de administración, ya que se insiste. **iii)** Se opone a la condena de la indexación de los valores ordenados a trasladar, porque el detrimento que sufrieron los aportes fue resarcido cuando PORVENIR S.A. trasladó los rendimientos de la cuenta a COLFONDOS, por lo que se está imponiendo una condena doble. **iv)** Finalmente, solicita se revoque la condena en costas, señalando que siempre actuó conforme a la buena fe y no fue la AFP que dio origen al traslado de régimen pensional.

4.4. COLPENSIONES¹²

La apoderada solicita se revoque la sentencia, centrando el análisis en lo siguiente: i) La demandante se encuentra inmersa en la prohibición legal del artículo 2 de la Ley 797 de 2003, y además por voluntad propia decidió trasladarse al RAIS sin que se demostrara algún vicio por lo que debe permanecer incólume su afiliación en COLFONDOS. No puede perderse de vista que durante todos los años en que se encuentra afiliada al fondo privado, tuvo la posibilidad de solicitar información pero nunca demostró interés no siendo posible admitir que, pasados tantos años, pretenda endilgar vicios de nulidad o ineficacia en su traslado, de manera conveniente, intentando retornar al RPM, Aduce que el deber de asesoría o buen consejo y doble asesoría, solo se hicieron exigibles desde el año 2009, con la ley 1328, ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015 y Circular externa 016 de 2016. ii) Solicita no ser condenada en costas, porque ha sido un tercero ajeno a la relación contractual existente entre la demandante y las AFP codemandadas, no tuvo participación ni incidencia alguna en el momento en que se efectuaron.

5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia¹³ intervino **COLPENSIONES** solicitando la revocatoria de la sentencia, planteando en síntesis: **i)** La demandante cuenta en la actualidad con 57 años de edad lo cual hace inviable el traslado de régimen conforme a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 y la sentencia C-1024 de 2010 y que la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado de la demandante y la obligación de reactivar la afiliación de la misma al Régimen de Prima Media con Prestación Definida puede poner en riesgo la expectativa pensional de los demás afiliados al sistema. **ii)** En relación al reproche que se le hace a las AFP codemandadas (Colfondos, Old Mutual, Porvenir y Protección) respecto al suministro de información que le debieron brindar al momento de efectuar el cambio de Régimen, menciona que la carga probatoria que se están imponiendo a las AFP resulta desproporcional y va en detrimento del principio de confianza legítima, solicitando se tenga en cuenta la normatividad aplicable al caso para el momento de la afiliación - C-086 de 2016 – **iii)** Colpensiones fue un tercero ajeno al contrato celebrado

¹² 01PrimerInstancia / Archivo 18 / Min.: 2:19:32

¹³ numeral 1 del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022

entre la señora Martha Isabel Barrero Muñoz y las AFP Colfondos, Old Mutual, Porvenir y Protección, por lo que no deberá emitirse condena alguna en su contra y menos aún imponerle el pago de costas procesales. **iv)** En el hipotético evento en el que decida conceder las pretensiones solicita condenar a la AFP Protección S.A. a entregar el total de los valores cotizados y/o depositados en la cuenta de ahorro individual de la demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses y cualquier otro concepto a consideración del Despacho. Y que se allegue por parte de Colfondos, Old Mutual y Porvenir el valor de las cuotas o gastos de administración que se causaron durante el "lapsus" que duró la afiliación de la señora Martha Isabel a dichas AFP.

El apoderado de **PORVENIR** reiteró las materias y argumentos del recurso de apelación:

i) Declaratoria de la ineficacia de la afiliación al RAIS: **a)** Expresa que al momento de realizar el traslado de la parte accionante al Régimen de Ahorro Individual, cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 633 de 1993, se le entregó a la parte demandante la información necesaria y obligatoria para la época dentro del mismo Formulario, el cual se recuerda es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus requisitos se regulan en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994. **b)** Por otro lado, la parte actora manifiesta que su motivación para iniciar este proceso es la diferencia en la mesada pensional entre los regímenes. Por lo tanto, es palmario que lo que motiva a la parte demandante a solicitar la nulidad o ineficacia de su traslado de régimen de pensiones no reposa en la forma en cómo este se produjo, sino en el supuesto hecho de no cumplirse sus expectativas sobre el eventual monto de la pensión que recibiría en este. **c)** Así mismo, se resalta que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones posteriores, surgidas a partir del año 2010 y 2014, lo anterior fue recapitulado y objeto de pronunciamiento en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia SL SL16882019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL3464- 2019, en consecuencia, tales obligaciones no existían para la época de la afiliación y mucho menos las mismas se pueden aplicar de manera retroactiva. **ii) Los valores recibidos con motivo de la afiliación:** **a)** Solicita que no se condene al traslado de los pagos de primas por seguros previsionales, aportes para garantía de pensión mínima, así como gastos de administración, pues las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que, se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, destinando así el 10% del IBC a las cuentas de ahorro individual, el 0,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS, y el 3% restante a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. **b)** Adicionando que atenta contra toda lógica jurídica la declaratoria de un enriquecimiento sin justa causa debido a la inaplicación de las normas legales que regulan las restituciones mutuas, derivadas de una nulidad o ineficacia de un acto jurídico ordenando devolver o restituir un bien (en este caso una suma de dinero depositada) las sumas que invirtió para el mantenimiento de dicho bien

e incrementarlo. **c)** se recuerda que la inversión de dichos gastos de administración en seguros previsionales y en la generación de rendimientos, no se dio de manera antojadiza, sino por el contrario se dio de acuerdo con el mandato legal establecido en el artículo 20 de la ley 100 de 1993 y a la obligatoriedad de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el literal e) del artículo 60 de la ley 100 de 1993. **d)** Las anteriores conclusiones frente a la ineficacia en la afiliación y en la manera en cómo deben operar las restituciones mutuas para hacer compatible el régimen y la sostenibilidad del sistema se han recogido y enriquecen con el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 Radicación 2019152169-003-000 el cual fue solicitado por ASOFONDOS. **iii) Condena en costas:** Su representada siempre obró de buena fe, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época en la que se dio el traslado de la parte demandante del RPM al RAIS y buscando siempre el beneficio de la parte demandante, por lo que la condena en costas no es procedente ante la ausencia de mala fe de su representada.

La apoderada de **COLFONDOS S.A.** en su alegato, introduce aspectos que no fueron materia del recurso de apelación, concretamente, respecto a las sumas que se ordenaron devolver a COLPENSIONES. Sobre lo apelado, agregó no estar de acuerdo con la declaratoria de ineficacia dado que, la vinculación de la activa ha COLFONDOS S.A. cumplió con lo establecido en el numeral B artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a que su decisión fue libre y voluntaria. Puesto que, previamente a su vinculación, él asesor de COLFONDOS S.A. brindó la asesoría completa, resaltando que la entidad que debía suministrar la información de las ventajas y desventajas de lo que implicó el traslado era PROTECCIÓN. Y que si bien **COLFONDOS** respeta el precedente judicial y conocedor de esta situación ha aceptado los fallos en los cuales es esta entidad la que realiza el primer traslado, en este caso es la última en la cadena de traslados que realiza la demandante lo que no se puede pasar por alto.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud del recurso de apelación de las **DEMANDADAS** y del grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de **COLPENSIONES**, lo que impone efectuar el análisis en el siguiente orden lógico: En primer lugar, la evolución normativa sobre los DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN MATERIA DE ASESORÍA E INFORMACIÓN CLARA Y VERAZ para tomar la decisión de traslado de régimen inicial al RAIS. Así, se analizará en el CASO CONCRETO si debe CONFIRMARSE la DECISION de DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN del DEMANDANTE, verificando lo relativo a las sumas que se ordenan devolver.

6. LOS DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN RELACIÓN CON EL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN O TRASLADO.

Esta Sala de Decisión ha tenido la oportunidad de expresar en varias oportunidades, que la decisión de un afiliado que estaba cotizando en el **I.S.S.** o en las otras Cajas de Previsión Social creadas antes de la Ley 100, **de trasladarse al RAIS**, exigía que la persona

tuviese absoluta claridad en relación con su situación pensional, las diferencias entre cada uno de los regímenes, los beneficios e inconvenientes de cada régimen pensional y en especial, **los efectos que en su caso se generan si toma la decisión de trasladarse.**

El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es exigible **desde su creación, y sin hacer distinción alguna**, de acuerdo a lo previsto en el **Decreto 663 de 1993**, aplicable a las AFP desde su origen, en el que se prescribió en el **numeral 1.º del artículo 97**, la obligación de las entidades de *«suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen.*

Es así como, conforme a lo previsto en el **artículo 271** en concordancia con el **literal b) del artículo 13 de la Ley 100**, los trabajadores tienen la opción de **elegir** *«libre y voluntariamente»* aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, y por ello, si alguna persona jurídica o natural atenta en cualquier forma contra el derecho de **afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social**, se genera como consecuencia la ineficacia de la afiliación.

En relación con este aspecto, la Sala laboral de la Corte Suprema ha desarrollado un precedente pacífico: **SL12136-2014, SL17595-2017, SL19447-2017, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464- 2019, SL4360-2019, SL2611-2020 y SL4806-2020, SL 2208 -2021 – SL 3871-2021- SL 5686-2021- SL 5688-2021- SL 1055-2022** que se apuntala en las siguientes premisas básicas:

- Si bien en los últimos años se ha intensificado la regulación, con lo previsto en la **Ley 1328 de 2009 artículos 3, 5, 7 y 9; Ley 1480 de 2011 artículo 23, Parágrafo 1o. del artículo 2 de la Ley 1748 de 2014**, y el **Decreto 2071 de 2015**, lo cierto es que la obligación de información clara y concreta previa al traslado se encuentra expresa en normas anteriores vigentes para la época en que se efectuó el traslado del demandante, **sin distinguir que tal deber sólo se refiera a los casos de las personas que eran beneficiarias del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100.**
- Para ello baste citar, **el artículo 13 en sus literales b) y k), el 106 y el 114 de la Ley 100**, en concordancia con lo previsto en el **artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y la modificación introducida con la Ley 795 de 2003**, normas en las que se establece que la selección régimen se debe tomar de manera libre, espontánea y sin presiones como requisitos para poder afirmar su eficacia; así como la obligación de las AFP de suministrar a los usuarios la información necesaria para escoger las mejores opciones del mercado y tomar DECISIONES INFORMADAS.
- Siendo, así las cosas, antes del traslado el usuario debe conocer la lógica del RAIS y la esencia de su funcionamiento, sustentado en la capacidad efectiva del ahorro a lo largo de toda la vida para poder garantizar el derecho a una pensión. Y debe tener total claridad acerca de los aspectos relacionados no sólo con el monto y los

requisitos de causación, sino la eventual opción de no acceder a esta prestación. Todos estos aspectos deben ser expresamente informados, para que el usuario pueda efectuar la comparación con las disposiciones que regulan el derecho pensional a los afiliados en el Régimen de Prima Media.

- En fin, significa entonces que la asesoría que debe brindar la Administradora de Pensiones en esa **ETAPA PREVIA Y PREPARATORIA** a la formalización de la información, no sólo debe ser completa y comprensible para la afiliada, sino que trasciende al “DEBER DEL BUEN CONSEJO” en los términos definidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su precedente, deber que en los mismos términos fue acogido en el **artículo 3 del Decreto 2071 de 2015**, pues al mostrar con detalle las diferentes alternativas de la persona tras el análisis de su caso, mostrando los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, debe incluso ir más allá, para evitar que la persona tome una opción que claramente la perjudica.
- Y en relación con la carga probatoria, es claro que en los términos del **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, ello no se agota solo con traer los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente para la persona, lo que no se satisface únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre. Por ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición. Y es así como las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.
- Finalmente, baste señalar cómo el criterio jurisprudencial orientador para este tipo de casos, fue plasmado en el **Código General del Proceso en el artículo 167**, norma en la que se consagra la posibilidad de distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos que ayuden a esclarecer el objeto del litigio y que en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala, no hay duda que la parte que debe cumplir con esa carga es el Fondo Privado: **a)** Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, con la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o

afiliación, y **la que se le ha entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **b)** Conoce y tiene los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y que hizo posible que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

Por último, debe la Sala señalar que si bien, el precedente jurisprudencial se encuentra referido a casos de personas que se encontraban afiliadas a una administradora del Régimen de Prima Media y además, beneficiarias del régimen de transición, a quienes les afectó de manera considerable la decisión de traslado de régimen pensional; sin embargo, resulta evidente que la *Ratio Decidendi* de esas providencias **resulta plenamente aplicable, a quienes eligieron el Régimen de Ahorro Individual por Primera Vez**, porque lo relevante está, en que efectivamente se acredite dentro del proceso por la Administradora de Pensiones, que sí suministró la INFORMACION CLARA, COMPLETA, SUFICIENTE, en términos de transparencia y eficiencia.

7. EL CASO CONCRETO

Para efectuar el análisis se debe partir de las siguientes premisas no discutidas: **i) ORFANNY HERNANDEZ ORTEGA** nació el **07 de diciembre de 1962**, por lo que en este momento cuenta con **60 años**¹⁴; **ii)** Se afilió inicialmente al RPMPD en noviembre 12 de 1985.¹⁵ **iii)** Se trasladó **PROTECCIÓN S.A.** En formulario en junio de 2000¹⁶, posteriormente a **HORIZONTE** con fecha de solicitud el 12 de septiembre de 2008.¹⁷ Luego, se trasladó a **COLFONDOS S.A.** con solitud del año 2010 el 29 de septiembre.¹⁸

Las demandadas han afirmado a lo largo del proceso que la SELECCIÓN DE RÉGIMEN se tomó de **forma libre, espontánea y sin presiones** en los términos del formulario de afiliación suscrito por la actora, pero en criterio de la Sala, leyendas de este tipo no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, **acreditan un consentimiento, pero no informado**. En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como “*la afiliación se hace libre y voluntaria*”, “*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*” u otro tipo de leyendas de esta clase, son insuficientes para dar por demostrado dicho deber (**CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, reiterada en SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020**).

¹⁴ 01PrimeraInstancia / Archivo 001 / Pág. 14

¹⁵ 01PrimeraInstancia / Carpeta ExpedienteAdministrativo / GRP-SCH-HL-66554443332211_1349-20181106042640

¹⁶ 01PrimeraInstancia / Archivo 001 / Pág. 18

¹⁷ 01PrimeraInstancia / Archivo 001 / Pág. 19

¹⁸ 01PrimeraInstancia / Archivo 001 / Pág. 20

Pues bien, según lo acreditado en el proceso, resulta evidente que para la fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para **ORFANNY HERNANDEZ ORTEGA**, ésta tenía menos de **35 años** de edad y menos **de 15 años de servicio**. Pero de acuerdo con el análisis efectuado en el **acápito sexto** de esta providencia y con el precedente jurisprudencial sobre la materia, los promotores de la AFP ante la suscripción del formulario de traslado, **independiente de si la demandante era beneficiaria o no del régimen de transición**, tenía no solo el **DEBER** sino la **OBLIGACIÓN** de brindarle una **asesoría personalizada**, analizando **las circunstancias particulares, y mostrando aspectos concretos de su situación pensional**.

Como para la época en que suscribió el formulario no había entrado en vigencia la Ley 797, se le debió explicar que si permanecía en el I.S.S. el derecho a la pensión de vejez se causaría al arribar a los 55 años de edad y acreditando 1000 semanas cotizadas para pensionarse con una mesada cuyo valor podría ser con una tasa del 85 % en caso de cotizar 1400 semanas, sobre un IBL integrado en los términos del artículo 21 de la Ley 100. Lo anterior, en virtud de lo previsto en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 que sería el aplicable en su caso por estar cotizando al I.S.S.

Y se le debió indicar además, que si se trasladaba para el RAIS, las condiciones pensionales serían las siguientes: **i)** Se podría pensionar antes de los 55 años, sin embargo tal circunstancia estaba sujeta a una condición y es que tuviera el capital suficiente para poder optar al menos por una pensión mínima (artículo 64 Ley 100); **ii)** Como la demandante tenía cotizaciones en el REGIMEN DE PRIMA MEDIA, debía saber que las cotizaciones que habían efectuado en el I.S.S. se verían representadas en un bono pensional tipo A que sólo **se redime en el caso de las MUJERES a los 60 años**, de manera que, si se daban las condiciones para pensionarse anticipadamente, habría que negociar el bono en el mercado financiero, disminuyendo su valor, lo que tendría efecto en el valor de la mesada, en la medida en que disminuiría el valor del capital para financiar la prestación. **iii)** Frente al valor de la pensión en el RAIS, se debió explicar que ésta depende del capital consignado en la cuenta individual y según la modalidad pensional elegida (artículos 79 a 82 de la Ley 100), y que el valor que se abonaría a la cuenta individual no sería equivalente al 100% de la cotización, porque una parte se destinaría a pagar la prima mensual de la compañía de seguros, a gastos de administración y al fondo de solidaridad del RAIS. **iv)** Y en relación con la ausencia de beneficiarios en materia de pensión de sobrevivientes y la posibilidad de que los dineros de la cuenta de ahorro individual se destinen a la masa hereditaria, se debió precisar que **ello no ocurre si la muerte se presenta siendo pensionado bajo la modalidad de renta vitalicia**. **v)** También se debía indicar, que en caso de que no completara el capital suficiente para obtener una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones actualizado con el IPC), entonces **debía seguir cotizando hasta obtener 1.150 semanas y cumplir 57 años**, para poder acceder a la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, mostrándole las claras

diferencias en los requisitos de la pensión con los del régimen de prima media como beneficiaria de transición. **vi)** Y que la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, es un beneficio que no se presenta en todos los casos porque está sujeto a unas condiciones y explicarle cuáles (artículo 84 de la Ley 100, vigente para la época), para que tuviese claro que, si no cumplía con ello, no obtendría pensión de vejez y por ello, la entidad le devolvería los saldos que estuvieran en su cuenta individual, con el efecto que eso genera en relación con la afiliación en salud.

Pero se observa con claridad que en el proceso no se acreditó por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES el haber suministrado esta información clara, completa y detallada, sin que se hubiese efectuado confesión en contra por la señora **ORFANNY HERNANDEZ ORTEGA**, diligencia en la fue enfática en reiterar las afirmaciones de la demanda relativas a la ausencia de información completa. Debe entonces la Sala CONCLUIR, conforme las normas, jurisprudencia y acervo probatorio recaudado, que resulta procedente **CONFIRMAR** la decisión que se revisa, para en su lugar **DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN.**

Lo anterior, sumado al hecho de que, el traslado que hubiese efectuado la demandante a otra AFP en manera alguna convalida la omisión en las obligaciones de información en la vinculación inicial al RAIS. En efecto en la citada sentencia **SL 3349 de 2021**¹⁹ se indicó que no puede desconocerse que un afiliado durante su vida laboral puede hacer varios traslados entre regímenes pensionales, o entre administradoras, sin que tal evento signifique que la **AFP pueda omitir, en cada ocasión, el suministro de la información** a que está obligada, con la calidad y en la oportunidad debidas so pretexto de una o varias vinculaciones anteriores. Y reiteró:

el hecho de tener sucesivas afiliaciones en el RAIS, después de haber abandonado el RPM, no tiene como consecuencia que de ello se derive una suerte de purga en el deber de información o de convalidación en su incumplimiento, tampoco el hecho de que el impugnante se haya vinculado, de manera discontinua al RAIS, aún con la misma administradora, significa per se que se tenga suficiente ilustración, conocimiento o comprensión de cada uno de los regímenes o que, se itera, tal situación releve del cumplimiento de sus deberes a la AFP, como lo exigen las normas aplicables en el momento en que acaezca tal evento.

Es decir, las administradoras siempre tendrán el deber de brindar información completa y veraz a los afiliados en cada vinculación, sin que pueda exonerarse de ella argumentando que la afiliada ya conocía previamente el régimen al que se vincula; Y sin que las sucesivas vinculaciones convaliden aquella que se hizo con vicios y dieron lugar a la declaratoria de ineficacia.

Debe destacarse que la ADMINISTRADORA DEL RAIS y COLPENSIONES en la contestación propusieron la EXCEPCION de PRESCRIPCION, pero en el contexto que se ha venido analizando, debe señalarse que estamos en presencia de la ineficacia del traslado: Y una de las características esenciales de la inexistencia, es que es insubsanable

¹⁹ Reiterada en la **SL 2521 – 2022**

por la prescripción - No adquiere vida por el transcurso del tiempo, por lo tanto, en cualquier tiempo puede ser alegada su inexistencia. En la sentencia **SL1688-2019**, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**, la Sala Laboral de la Corte explicó con claridad sobre la inoperancia del medio exceptivo, no solo por su conexidad con un derecho fundamental e irrenunciable, sino porque el sustento fáctico del proceso da lugar a consolidar el status de pensionado, y, en consecuencia, propiciar la posibilidad del disfrute de un derecho económico no susceptible de extinción por el transcurso del tiempo.

Finalmente, **en relación con las sumas de dinero que se deben devolver**, debe señalarse lo siguiente: **i)** En la medida en que el legislador no previó un camino específico para declarar la ineficacia distinto al de la nulidad, la Sala Laboral de la CSJ en sentencias **SL1688, 3464 y SL 4360 de 2019**, así como en la **SL 2877 y SL 4811 de 2020** ha explicado que las consecuencias prácticas de la primera declaración son idénticas a la de la segunda (vuelta al *statu quo ante*). **ii)** Y como el precepto que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades es el **artículo 1746 del Código Civil** y este por analogía es aplicable a la ineficacia, según esta disposición, declarada la ineficacia, las partes, *en lo posible*, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. **iii)** O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia *ex tunc* (desde siempre). De no ser posible, es decir, cuando la vuelta al ***statu quo ante*** no sea una salida razonable o plausible, el juez del trabajo debe buscar otras soluciones que resarzan o compensen de manera satisfactoria el perjuicio ocasionado al afiliado, con ocasión de un cambio injusto de régimen. **iv)** Y en la medida que la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone **negarle efecto al traslado**, tal situación solo es posible bajo **la ficción de que el mismo nunca ocurrió**. Luego, si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que **nunca se cambió al sistema privado de pensiones**, y si estuvo afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que **nunca se trasladó al sistema público administrado por COLPENSIONES**. **v)** Por esto mismo, en tratándose de *afiliados*, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a COLPENSIONES la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales a que haya lugar; así como **los gastos de administración, las comisiones** (CSJ **SL4964-2018, SL1688-2019, SL2877-2020, SL4811-2020 y SL373-2021**), los porcentajes destinados a conformar el **Fondo de Garantía de Pensión Mínima** y los valores utilizados en **seguros previsionales** con cargo a sus propias utilidades (CSJ **SJ SL2209-2021 y SL2207- 2021**). **vi)** Por lo anterior, no se acogerá el argumento de **PORVENIR S.A.** respecto a que no deben trasladarse los gastos administración y prima de seguro previsional amparándose en el **Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia** que en manera

alguna tiene carácter vinculante²⁰ y en el que se invoca el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008 norma que fue expedida para efectos de traslado en asuntos referentes a multifiliación²¹, situación que no corresponde a la aquí ventilada. Así, reconoce esta corporación que si bien existió una administración por parte de las AFP, además del pago de seguros, producto de la declaratoria de ineficacia todos los recursos deben trasladarse a aquella administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, teniendo presente que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional, se cubren las prestaciones causadas. Por ello, **PORVENIR S.A., PROTECCION S.A. y COLFONDOS S.A.**, efectuarán la devolución en relación con los períodos en que la actora estuvo afiliada. **vii)** Ahora, respecto a la orden emitida en torno a la devolución de la prima de reaseguro de Fogafín se encuentra que tal concepto es ajeno a los descuentos efectuados sobre la cotización mensual de los afiliados al RAIS, y se asume con el patrimonio directo de cada AFP por ser un seguro de depósito obligatorio para todas las entidades financieras. Al respecto, el artículo 99 de la Ley 100 de 1993 disponía que las administradoras y aseguradoras, incluidos las de planes alternativos de pensión, debían constituir y mantener adecuadas garantías, dentro de ellas la del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos. No obstante, el artículo 163 de la Ley 1450 de 2011 dispuso: *"Elimínese la garantía de FOGAFÍN a las Administradoras de Cesantías y a las de pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la obligación a las Aseguradoras de inscribirse en el Fogafín. Las reservas existentes se trasladarán al Tesoro Nacional dada la condición de garante que tiene la Nación en ambos sistemas."* Así las cosas, no es viable ordenar el reintegro de esas sumas con destino a COLPENSIONES tal como lo señala el apoderado de PROTECCIÓN en su recurso **viii)** Se destaca que ninguna de las devoluciones acá ordenadas se ve afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, excepción propuesta por las accionadas, la que a voces de la Sala de Casación Laboral de la CSJ no opera en estos litigios, dado el carácter irrenunciable del derecho pensional, que se extiende a la acción para reclamar su conformación con todos los aspectos conexos que le son inherentes (**CSJ SL1688-2019; CSJ SL12715-2014;**

²⁰ **"ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución."

²¹ **Decreto 3395 de 2008 ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN.** <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a los afiliados al Sistema General de Pensiones que, al 31 de diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7o, 8o y 12 del presente decreto

CSJ SL 28479, 4 jun. 2008, CSJ SL 39347 y CSJ SL 8397, 5 jul. 1996. SL1688-2019, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**).

Finalmente, para garantizar la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA esta Sala de Decisión ordenaba que el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente definido por la Corte Constitucional en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 DE 2010 y SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM. Pero reexaminando el asunto, y a partir del precedente vertido por la Sala de Casación Laboral en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021, SL 3709-2021 y SL 1055-22**, considera que lo procedente para tal fin es ordenar **la devolución de tales sumas debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**. Al momento de cumplirse los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Así, en este aspecto se **ADICIONARÁ** la providencia que se revisa.

Sobre las **COSTAS**, debe indicarse lo siguiente: **i)** En primera instancia se **CONDENÓ** en **COSTAS** a todas las entidades, decisión que fue cuestionada de manera concreta por **COLPENSIONES, COLFONDOS y PORVENIR** y a ello se accederá, porque tal como se ha analizado a lo largo de esta providencia, la razón para declarar la ineficacia del traslado de régimen se sustenta en que la AFP **PROTECCIÓN S.A** no acreditó el haber suministrado una información clara, suficiente y completa a la actora en la etapa previa a la suscripción del formulario de traslado, todo ello a la luz de lo previsto en los **artículos 271 y 13 literal b)** de la Ley 100, y el precedente jurisprudencial pacífico y reiterado sobre la materia. Así, la orden que se profiere en contra de **COLFONDOS y PORVENIR** solo encuentra sustento en tal declaración. En adición, respecto a **COLPENSIONES** debe indicarse que no intervino en manera alguna en el acto jurídico de traslado al RAIS, y para el momento en que la demandante pretendió regresar al Régimen de Prima Media le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad de pensión de vejez, de manera que la decisión adoptada en su momento negando el traslado de régimen tuvo sustento legal. **ii)** Al prosperar parcialmente todos los recursos de apelación **en esta instancia no se causan costas**.

8. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín con las siguientes **MODIFICACIONES**:

- El numeral **SEGUNDO**, porque dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, **AFP COLFONDOS S.A.** debe trasladar a COLPENSIONES la totalidad del capital ahorrado por la señora **ORFANNY HERNANDEZ ORTEGA**, junto con los rendimientos financiero a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, incluyendo así: **CUOTAS DE ADMINISTRACION, PRIMAS PARA SEGURO PREVISIONAL y las SUMAS DESCONTADAS PARA GARANTIA DE PENSION MINIMA** debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos, **en proporción a tiempo de permanencia**. Al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, conforme lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.

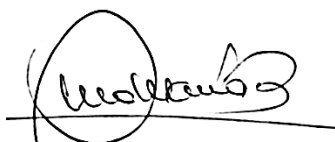
Así mismo, se **CONDENA** a **PROTECCIÓN S.A.** y **PORVENIR S.A.** a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, incluyendo así: **CUOTAS DE ADMINISTRACION, PRIMAS PARA SEGURO PREVISIONAL y las SUMAS DESCONTADAS PARA GARANTIA DE PENSION MINIMA** debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos, **en proporción a tiempo de permanencia**. Al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

- El numeral **SEXTO**, porque se revoca la condena en costas en contra de COLFONDOS, PORVENIR y COLPENSIONES conforme lo definido en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron.

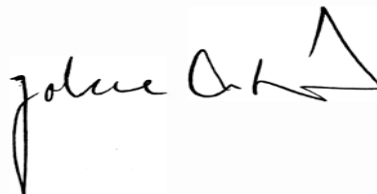
Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE



JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ